

[Aguas Argentinas c/ Asoc. Cosmopolita Carboneros Unidos](#)

Voces: [VERDAD JURÍDICA OBJETIVA](#) - [EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO](#) - [EJECUCIÓN FISCAL](#) - [SUMINISTRO DE AGUA](#) - [LEY NACIONAL](#) - [EXENCIONES TRIBUTARIAS](#) - [MUTUALES](#) - [LEGITIMACIÓN PASIVA](#) - [JERARQUÍA DE LAS LEYES](#) - [APLICACIÓN DE DECRETOS](#) - [TUTELA JUDICIAL EFECTIVA](#)

Partes: Aguas Argentinas c/ Asoc. Cosmopolita Carboneros Unidos s/ ejec. fiscal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 6-ago-2009

Cita: MJ-JU-M-51780-AR | MJJ51780 | MJJ51780

Se revoca la resolución de anterior instancia que manda llevar adelante la ejecución, por ausencia de legitimación pasiva en la Asociación Mutual demandada, **al estar exenta del pago de los servicios sanitarios reclamados por la actora** - empresa concesionaria del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales-.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Asociación Mutual demandada y revocar en consecuencia la resolución de anterior instancia que manda llevar adelante la ejecución, al constituir el agravio vertido por la demandada una cuestión de investigación oficiosa aún en el proceso de ejecución: la legitimación pasiva del demandado, y si bien la actora- empresa concesionaria del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales-, ataca este planteo, fundado en los términos de los artículos 554 y, subsidiariamente, 544 del CPCCN, vale decir, en la inapelabilidad de la sentencia de trance y remate y en que la inhabilidad de título sólo puede referirse a las formas extrínsecas, sin embargo, el análisis que este instituto merece es mucho más profundo, pues es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que la ausencia de legitimación se encuentra implícita en la inhabilidad de título; y es indiscutible que todo lo vinculado a la legitimación constituye cuestión de investigación oficiosa, en tanto hace a la validez de la sentencia.

2.-Corresponde revocar la resolución de anterior instancia que manda llevar adelante la ejecución contra la Asociación Mutual demandada, pues la presentación de ésta última ha resultado la primera oportunidad en que la recurrente se presentó a estar a derecho y esgrimir sus argumentos en contra de la ejecución, a su vez, si bien es correcto que los procesos como el presente ofrecen un acotado ámbito de debate, no menos cierto es que **el derecho a la defensa no puede verse desplazado en pos de un desmesurado celo procesal.**

3.-**Uno de los presupuestos del debido proceso adjetivo es la garantía de la tutela efectiva,** recepcionada en el art. 6 del Tratado Europeo de Derechos Humanos, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que no sólo se encuentra estrechamente vinculada al principio de economía procesal y a los principios de celeridad, concentración, eventualidad y saneamiento, sino que abarca también la interpretación de la norma procesal que favorezca la operatividad efectiva del derecho sustancial -verdad jurídica objetiva-.

4.-No resulta conducente decidir en el presente con sustento en la nueva oportunidad que brinda lo normado en el artículo 553 del CPCCN -juicio ordinario posterior-, pues no resulta saludable a la voluntad de economizar los procesos y sus trámites, inducir a las partes a embarcarse en nuevos litigios, para reiterar posiciones sobre un conflicto que ya se encuentra acabadamente planteado con lo que hasta aquí han expuesto los justiciables. Lo antedicho cobra mayor importancia aún y se ve perfectamente ejemplificado al tratar la defensa que opone la demandada, pues en efecto, el obstáculo formal invocado por la ejecutante conllevaría, en el caso, a desaplicar la ley de fondo y no ha de olvidarse que el derecho procesal es un instrumento para el mejor cumplimiento de la ley, por lo que no debe nunca convertirse en una herramienta para su evasión.

5.-Si bien la ley 20324 en su artículo 71 deroga todas las leyes y decretos que establezcan, directa o indirectamente, exenciones o rebajas en el pago de los servicios sanitarios, determinando a continuación de manera taxativa a las instituciones que contarían con esa franquicia, no incluyendo entre sus beneficiarios a las instituciones mutuales, finalmente, la ley 20686 agregó a las exenciones o rebajas a las asociaciones mutuales inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades, a condición de que presenten un certificado expedido por el organismo nacional de aplicación del régimen legal sobre asociaciones mutuales. Pues bien la constancia acompañada por la Mutual demandada, en consecuencia, cumple acabadamente con lo que la ley exige para que la exención se vea configurada cabalmente.

6.-El artículo 29 de la **Ley Orgánica de Mutualidades -Ley Nº 20.321-** dispone que **las asociaciones mutualistas se encuentran exentas en el orden nacional (...) de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras,** en relación a **sus bienes y por sus actos** y si bien la normativa emanada del proceso de privatización del servicio pone a cargo y responsabilidad del cobro de los servicios a la Empresa actora-ahora privatizada-y determinan el sujeto de imposición de las tarifas, esto es, el o los propietarios del inmueble del que se trate -arts. 51 y 55 decreto 999/92, respectivamente-, se tratan éstas últimas de normas de rango inferior a la traída a estudio por la parte demandada - Ley Nº 20.321-, por lo que **por tratarse la exención de una cláusula dispuesta en una ley nacional, especial que contempla el caso bajo análisis, debe estarse por la aplicación de ésta y no de decretos y reglamentos que son inferiores en el rango normativo que surge de la Constitución Nacional -artículo 31 -.**

Fallo:

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La demandada apeló el decisorio de fs 24, por el cual el Sr. Juez de grado mandó llevar adelante la ejecución. Corrido el pertinente traslado, la actora contestó los agravios de su contraria a fs 60/63.

I.- La empresa concesionaria del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales, "Aguas Argentinas S.A.", promovió la presente ejecución contra el propietario del inmueble ubicado en la calle Venezuela 2943 de esta Ciudad. A fs 19, y a resultados del informe solicitado al Registro de la Propiedad Inmueble, se rectificó la titularidad de dicho dominio, siendo consecuentemente enderezada la demanda contra la "Asociación Carboneros Unidos de Socorros Mutuos y Protección

Gremial".

II.- Alude "Aguas Argentinas" al estrecho marco de conocimiento que caracteriza al proceso ejecutivo, en cuanto a que la demandada realiza sus planteos en instancia de apelación y no en la oportunidad prevista para la oposición de excepciones. Sobre el particular ha de señalarse que la presentación de fs 54/55 ha resultado la primera oportunidad en que la recurrente se presentó a estar a derecho y esgrimir sus argumentos en contra de la ejecución. A su vez, si bien es correcto que los procesos como el presente ofrecen un acotado ámbito de debate, no menos cierto es que el derecho a la defensa no puede verse desplazado en pos de un desmesurado celo procesal.

En este orden de ideas, cabe destacar que uno de los presupuestos del debido proceso adjetivo es la garantía de la tutela efectiva, recepcionada en el art. 6 del Tratado Europeo de Derechos Humanos, art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. No sólo se encuentra estrechamente vinculada al principio de economía procesal y a los principios de celeridad, concentración, eventualidad y saneamiento, sino que abarca también la interpretación de la norma procesal que favorezca la operatividad efectiva del derecho sustancial (esta Sala 480.552, De los Santos, M., "El debido proceso en la práctica judicial", JA, 2003-IV, págs. 1249/1252).

En igual sentido, la Corte Suprema sostuvo que "el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte." ("Colalillo c/ Cía. de Seguros España y Río de la Plata"; Fallos: 238:550, 18-09-57). En esta línea de razonamiento, tampoco resulta conducente decidir en el presente con sustento en la "nueva oportunidad" que brinda lo normado en el artículo 553 del Código Procesal. No resulta saludable a la voluntad de economizar los procesos y sus trámites, inducir a las partes a embarcarse en nuevos litigios, para reiterar posiciones sobre un conflicto que ya se encuentra acabadamente planteado con lo que hasta aquí han expuesto los justiciables.

Lo antedicho cobra mayor importancia aún y se ve perfectamente ejemplificado al tratar la defensa que opone la demandada. En efecto, el obstáculo formal invocado por la ejecutante conllevaría, en el caso, a desaplicar la ley de fondo. No ha de olvidarse que el derecho procesal es un instrumento para el mejor cumplimiento de la ley, por lo que no debe nunca convertirse en una herramienta para su evasión.

III.- El agravio vertido por la demandada constituye una cuestión de investigación oficiosa aún en el proceso de ejecución: la legitimación pasiva del demandado. La actora ataca este planteo en su contestación del memorial, fundando la misma en los términos de los artículos 554 y, subsidiariamente, 544 del Código Procesal, vale decir, en la inapelabilidad de la sentencia de trance y remate; y en que la inhabilidad de título sólo puede referirse a las formas extrínsecas.

Sin embargo, el análisis que este instituto merece es mucho más profundo, pues es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que la ausencia de legitimación se encuentra implícita en la inhabilidad de título; y es indiscutible que todo lo vinculado a la legitimación constituye cuestión de investigación oficiosa, en tanto hace a la validez de la sentencia (cfe. SC Mendoza, Sala I, 18/12/91, LL 1992 - C. 201 y CNCiv, Sala CC, 14/3/86, JA 1986 - Síntesis, citado por De los Santos, M., "Falta de acción.", en Peyrano y otros, "Excepciones Procesales", pág. 75, Ed. Panamericana, 1994).

Sobre el primer punto, esto es, la oportunidad en que debió articularse la excepción y la consecuente inapelabilidad de la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución, ha entendido la doctrina que ".aun en el caso de no haberse opuesto esta excepción, el juez puede declarar de oficio la inhabilidad del título en oportunidad de proveer a la demanda o de dictar sentencia, y que lo mismo puede hacer el tribunal de alzada a raíz del recurso deducido contra aquélla" (cfe. Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Tº VII, 'Procesos de Conocimiento (sumarios) y de Ejecución' págs. 423/436, Ed. Abeledo-Perrot, 1982).

En lo que hace a la limitación que importa el artículo 544 del Código de Rito, en cuanto sólo admite que la excepción de inhabilidad de título se refiera a las formas extrínsecas de éste, sin discusión de la legitimidad de la causa, se ha resuelto que aquélla resulta improcedente. La regla no puede llevarse al extremo de permitir la convalidación de actos que contrarían principios vinculados al interés público. En especial, importaría el menoscabo de garantías constitucionales cuando se tratare de "ejecuciones tendentes a la percepción de la renta pública, en las cuales el criterio restrictivo que la ley impone para admitir la excepción (.) no puede prevalecer cuando el pago del gravamen resulte frustratorio de derechos de orden federal o constitucional y el remedio del ulterior proceso de conocimiento aparezca como ineficaz." (Cfe. Palacio, op. cit.).

Finalmente, se ha dicho que "la regla cede cuando existe la seria posibilidad de que la condena se fundó en una deuda inexistente, lo que sucede si se discute la causa fuente de la obligación con fundamento constitucional y en una ley que podría autorizar una **exención** fiscal" (Cfe. Palacio, op. cit.).

IV.- El artículo 29 de la Ley Orgánica de Mutualidades (Ley Nº 20.321) dispone que las asociaciones mutualistas se encuentran "exentas en el orden nacional (.) de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos".

La actora invoca, al contestar el memorial de la recurrente, la normativa emanada del proceso de privatización del servicio. Funda su respuesta en las disposiciones que ponen a su cargo y responsabilidad el cobro de los servicios, así como las que determinan el sujeto de imposición de las tarifas, esto es, el o los propietarios del inmueble del que se trate (arts. 51 y 55 decreto 999/92, respectivamente). Se trata de normas de rango inferior a la traída a estudio por la parte demandada. En efecto, por tratarse la **exención** de una cláusula dispuesta en una ley nacional, especial además, que contempla el caso bajo análisis, debe estarse por la aplicación de ésta y no de decretos y reglamentos que son inferiores en el rango normativo que surge de la Constitución Nacional (artículo 31).

De los fundamentos de la ejecutante surge también el conflicto de normas que se encuentra referido al modo y momento en que las entidades debían perfeccionar el trámite de solicitud de la **exención**, y no a ésta misma. Así lo entendió, en planteos similares, el Procurador del Tesoro Nacional (19/10/99, "Aguas Argentinas c/ Fénix Club Asociación Mutualista"; en Dictámenes, 231:91).

V.- Llamó a divergencia, en su momento, la serie de cambios reglamentarios que planteaban una diferenciación en favor de las instituciones de bien público y aquéllas que no lo fueran (arts. 11 a 15 de la resolución 275/89 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, luego dejada sin efecto por el artículo tercero de la resolución 1337/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos). Esto llevaba en cada caso a discurrir si se trataba de mutuales dirigidas al bien público o no.

Otro factor que atentó contra la unidad de criterio sobre el tema era el hecho de que, con la transferencia del servicio de un órgano del Estado a una persona del derecho privado con fines lucrativos, lo que era una tasa se transformó en un precio. La

diferencia radica en que "tasa" es un recurso fiscal, destinado a cubrir los gastos del Estado por la prestación un servicio, en tanto que el precio sólo se vincula a un cálculo de costos y beneficios realizado en orden a la obtención de ganancia por parte de la empresa. De esa diferencia surgió el criterio según el cual, al implicar la **exención** una compensación por parte del Tesoro Nacional a favor de la concesionaria, por tratarse de un precio en vez de una tasa, lo que se daba era una erogación por parte de aquél sin fundamento en la ley, lo que sugería su improcedencia (cfe. manifestación de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Rec. Naturales y Desarrollo Sustentable, dictamen citado).

Con posterioridad a aquellas regulaciones, la ley 20324 en su artículo 71 derogó "todas las leyes y decretos que establezcan, directa o indirectamente, **exenciones** o rebajas en el pago de los servicios sanitarios.", determinando a continuación de manera taxativa a las instituciones que contarían con esa franquicia. La norma no incluía entre sus beneficiarios a las instituciones mutuales.

Finalmente, la ley 20686 agregó a las exenciones o rebajas a "las asociaciones mutuales inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades, a condición de que presenten un certificado expedido por el organismo nacional de aplicación del régimen legal sobre asociaciones mutuales".

VI.- La constancia acompañada por la recurrente a fs. 4 1, en consecuencia, cumple acabadamente con lo que la ley exige para que la **exención** se vea configurada cabalmente. A mayor abundamiento, las acompañadas a fs 32, 33 y 39 acreditan el intercambio epistolar por el cual tanto la actora como su antecesora en la prestación del servicio han manifestado su reconocimiento de la **exención** que la demandada invoca.

VII.- Las costas se impondrán a la actora vencida, por cuanto de la actividad que ejerció como prestadora del servicio y como parte representada en la integración del ETOSS, mal pudo haber desconocido la normativa que desautorizaba su pretensión, lo que no permite apartarse del criterio objetivo la derrota (art. 558 del Código Procesal)

Por los motivos expuestos, el Tribunal RESUELVE: Revocar la resolución de fs 24 y rechazar la ejecución impetrada. Con costas, en ambas instancias, a cargo de la actora. Regístrese y devuélvase.-

Fdo.: Mabel De los Santos, Carlos R. Ponce y Elisa Díaz de Vivar.

MARIA LAURA VIANI